

Montevideo, 14 de febrero 2013

**Resolución preliminar de la Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo en el caso T**

1. Antecedentes y primeras actuaciones de la INDDHH.

- a) La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) recibió oportunamente una denuncia relacionada con una agresión sufrida por la joven [redacted], en las primeras horas del [redacted] de [redacted]. El hecho tuvo lugar a la salida del boliche [redacted] ubicado en el [redacted] de Montevideo. Según la denuncia, [redacted] fue golpeada por un grupo de mujeres, causándole serias lesiones. Se agregaba en la denuncia que el motivo de la agresión tendría relación directa con la condición de afrodescendiente de la joven [redacted].
- b) La INDDHH inició las actuaciones pertinentes, de acuerdo a lo ordenado por los Arts. 11 y stes. de la ley 18.446 de 24 de diciembre de 2008 ("Procedimiento de denuncias").
- c) Como parte de las acciones desarrolladas en el procedimiento mencionado, con fecha 17 de diciembre de 2012, se ofició a la Suprema Corte de Justicia; al Sr. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y al Sr. Ministro del Interior, solicitando se remitiera, en el plazo más breve posible, la información en poder de estos organismos del Estado en relación con el caso de marras.
- d) Con fecha 26 de diciembre de 2012, se recibió por parte de la INDDHH la Nota No. 386/2012 enviada por la Suprema Corte de Justicia. En la misma, el Sr. Director General de Servicios Administrativos del Poder Judicial, Dr. Elbio Méndez Areco, adjuntaba fotocopia de la nota firmada el 24 de diciembre de 2012 por el Sr. Pro Secretario Letrado de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Carlos F. Alles Fabricio. En la nota se señalaba textualmente: *"Conforme a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia en el Acuerdo del 22 de Diciembre del corriente, informo que he recabado la información siguiente: A la fecha de hoy, no existe aún presumario en trámite en ninguna Sede, el cual se iniciará en el momento en que puedan ubicarse a los responsables, lo cual aún no ha sido comunicado a la Justicia. Las diligencias que fue posible realizar, informe médico forense, por ejemplo, se han efectuado. Actualmente se ha solicitado autorización judicial a fin de que las filmaciones de que se dispone puedan ser mejoradas por parte de la Policía Técnica, por cuanto no resultan claras"*.
- e) Por su parte, con fecha 27 de diciembre de 2012, la INDDHH recibió el Oficio No. 2572/12, remitido por el Sr. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Jorge Díaz Almeida. Se informa, en síntesis, que *"hemos realizado*

Sede Provisoria: Anexo Palacio Legislativo Sala 225.

Tel: 142 internos 3242 y 3243

Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

la consulta del asunto a los seis fiscales penales que han estado de turno en Montevideo desde el día de la agresión sufrida por hasta la fecha. En principio, recibimos la respuesta de que el caso mencionado estaba en la orbita policial donde se seguía la correspondiente indagación, sin haberse formalizado expediente alguno en sede judicial, por lo que, en consecuencia, no había tomado intervención el Ministerio Público. No escapa a vuestro conocimiento que, debido a la naturaleza inquisitiva del proceso penal uruguayo, toda investigación es dirigida por los señores jueces, quienes tienen como auxiliar a la Policía Nacional. No obstante ello, en el día de hoy hemos recibido vía e mail una comunicación de la Dra. Adriana Umpiérrez, Fiscal Letrada en lo Penal de Primer Turno, informando que con motivo de los hechos de referencia se formó el expediente 95-321/2012 ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 18vo. Turno, en la que interviene la Fiscal mencionada”.

- f) *En la misma dirección, la INDDHH recibió, con fecha 16 de enero de 2012 una nota firmada por la Dra. Lorena Placencia, Adjunta del Director General de Secretaría del Ministerio del Interior. En síntesis, en la nota se manifiesta que la Jefatura de Policía de Montevideo informó, cumpliendo instrucciones de la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior, que “La investigación policial comenzó inmediatamente después de producidos los hechos, y continúa en trámite. El hecho fue denunciado en jurisdicción de la Seccional de Policía que realizó las actuaciones primarias. De estas actuaciones se dio cuenta al Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. Posteriormente, el procedimiento es derivado a la Sección de Delitos contra la Persona del Área de Investigaciones, Sección que continúa entendiendo en el caso. Entre las actuaciones realizadas, se recabaron testimonios y otro tipo de medios probatorios, que se han analizado, además se realizó una búsqueda de datos en el Sistema de Gestión en Seguridad Pública (SGSP). Con la información obtenida se avanzó en las investigaciones. De las nuevas actuaciones se da cuenta al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de . Turno. Posteriormente continúa la actividad policial. Es así que se entrevistó a la víctima, en el Hospital ; se libraron oficios a instituciones de carácter público y privado y se efectuaron otras actuaciones policiales, de las cuales tiene conocimiento y fueron autorizadas por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Turno. No podemos dar detalles a la Institución sobre la naturaleza de las referidas actuaciones sin previa autorización del Magistrado, por estar comprendidas en la reserva del presumario. Finalmente, queremos comunicar que el Encargado de la Sección de Delitos contra la Persona de la División II informa que se continúan realizando actuaciones para dar con el paradero de las/los responsables; de producirse novedad, se le enterará de inmediato a la Justicia. Es importante señalar que la Sede Penal que tendrá competencia definitiva en el caso será determinada, según las normas de competencia en materia penal, una vez que sean ubicados las/los posibles responsables y tengan que ser conducidos a Juez”.*

- g) *Anteriormente, el 28 de diciembre de 2012, la INDDHH recibió de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, copia de la nota presentada por ese organismo el día 26 de diciembre de 2012 ante el Sr. Juez*

Letrado de Primera Instancia en lo penal de Turno. El escrito, firmado por el Dr. Javier Miranda (Director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura y Presidente de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de Discriminación) y por la Dra. Alicia Saura (Secretaria Técnica de la mencionada Comisión). La nota proporcionaba a la sede penal información técnica y fáctica sobre racismo y discriminación en nuestro país, de acuerdo a sus competencias, establecidas por la Ley No. 17.817 del 30 de mayo de 2006.

- h) El 28 de enero de 2013, la INDDHH mantuvo una reunión de trabajo con el Sr. Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich, en el marco de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación. A dicha reunión asistieron también representantes del Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Desarrollo Social. Del mismo modo, durante todo este proceso, la INDDHH mantuvo comunicación con familiares de y con la organización no gubernamental a cargo de su asistencia legal, el
- i) El 29 de enero de 2013, la INDDHH, a través de su Presidenta, envió una nota al Sr. Presidente de la Suprema Corte de Justicia. En la parte medular de la nota, se señalaba que *“Es de enorme preocupación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo la falta de actuación inmediata de la Justicia, frente a la gravedad de los hechos, en tanto no se habría realizado ninguna diligencia en Sede Judicial para el esclarecimiento de los mismos, existiendo solamente actuaciones policiales”*.
- j) Con fecha 6 de febrero de 2013, el Sr. Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Ruibal Pino, remite nota a la INDDHH. En síntesis, relata pormenorizadamente las actuaciones judiciales realizadas a partir del 14 de diciembre de 2012 y señala, que *“La Suprema Corte de Justicia no ha tomado conocimiento de que haya existido falta de diligencia u omisión alguna en la actuación del órgano jurisdiccional interviniente, sin perjuicio de lo cual se observa que no corresponde –en este ámbito- que la Corte ingrese a examinar el mérito de la cuestión, pues, salvo la hipótesis excepcional prevista por el art. 26.3 del C.G.P, los asuntos de naturaleza jurisdiccional se encuentran excluidos del control administrativo que ejerce la Corporación en virtud de las potestades atribuidas por la Constitución Nacional (art. 239 inc. 2 CN)”*, citando a continuación valiosa doctrina nacional e internacional sobre la especie.

2. La difusión del video de la agresión en los medios masivos de comunicación.

La INDDHH entiende que no debe dejar de prestarse atención al hecho de que el

2013, el video grabado por las cámaras de seguridad del boliche tomó estado público a través de los medios televisivos. Este hecho abrió un complejo, y no siempre bien direccionado debate, respecto al hecho en sí; a las motivaciones de las agresoras; y a la supuesta responsabilidad de la víctima. En algunos programas de radio y televisión se recogió la opinión de periodistas, analistas y “panelistas” donde se

Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
pudieron escuchar comentarios velada o directamente discriminatorios o racistas en relación al caso.

3. La intervención de la justicia competente.

Tres de las agresoras de [REDACTED] se presentaron voluntariamente ante la policía. Luego de los procedimientos legales de estilo, y previa vista al Ministerio Público, Dr. Carlos Negro, el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno, Dr. Juan Carlos Fernández Lechini, resolvió el procesamiento con prisión de las tres agresoras “como autoras de un delito de lesiones graves intencionales”, a la vez que libró orden de captura contra la cuarta de las agresoras, que aún no había sido detenida por la policía ni se había entregado voluntariamente, como lo habían hecho las tres restantes (Procesamiento [REDACTED]). En el mismo auto de procesamiento se verifica que [REDACTED] recibió graves lesiones (“laceraciones en el hígado”, describiendo a continuación en detalle la entidad de las mismas) por lo que debió permanecer internada en un hospital por el lapso de dos semanas. En las últimas horas se conoció que la cuarta agresora, hasta ahora prófuga, había decidido entregarse voluntariamente a la justicia.

En el auto de procesamiento no se hace ninguna referencia a eventuales conductas racistas, xenófobas o discriminatorias de parte de las agresoras en perjuicio de [REDACTED] (Ley No. 17.817 del 30 de mayo de 2006).

4. La intervención de la INDDHH posterior a la intervención de la justicia.

Las competencias y facultades de la INDDHH están claramente definidas en la ley 18.446 de 24 de diciembre de 2008. En especial, en lo que hace a la naturaleza de sus pronunciamientos y a su intervención en aquellos casos que han ingresado ya a la esfera de la justicia competente. Por la importancia de estas disposiciones en el caso de marras, se las cita textualmente:

Artículo 3°. (Efectos de las resoluciones).- Las resoluciones de la INDDHH tendrán el carácter de recomendaciones y, consecuentemente, no podrán modificar ni anular actos administrativos o jurisdiccionales.

Artículo 6°. (Inhibición).- La INDDHH no tendrá competencia en asuntos que se encuentren en trámite de resolución en la vía jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo. En caso de denuncias, procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de esta ley. Sin perjuicio, la INDDHH tendrá competencia para efectuar propuestas sobre aspectos generales y realizar informes o emitir opiniones en relación con la función administrativa de los organismos con función jurisdiccional y su organización.

Artículo 19. (Casos en trámite).- Cuando la denuncia refiera a hechos que estén en trámite de resolución jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo, la INDDHH no intervendrá en el caso concreto, pero ello no impedirá la investigación sobre los problemas generales planteados en la denuncia. La INDDHH velará por que los órganos con función jurisdiccional, Contencioso

Administrativo o la Administración, en su caso, resuelvan expresamente, en tiempo y forma, las demandas, denuncias o recursos que hayan sido formuladas o interpuestas.

A mayor abundamiento, es precisa y clara la Exposición de Motivos de la citada ley 18.446, cuando establece:

“La INDDHH no sustituye ni desplaza las competencias originales de los diversos poderes del Estado. En ningún caso la INDDHH ejercería función jurisdiccional, ni tendría facultades para revocar actos administrativos, no desempeñaría funciones ejecutivas, ni legislativas. Sus cometidos se acotarían a sugerir medios correctivos, efectuar recomendaciones no vinculantes e intervenir en denuncias por violaciones a los derechos humanos, sin interferir con las funciones jurisdiccionales, ejecutivas o legislativas que a los respectivos poderes correspondan. En relación con la intervención en las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, es muy importante insistir en que no se trata de sustituir al Poder Judicial, ni de afectar la autonomía de su función jurisdiccional. El Poder Judicial, en una sociedad democrática, es una estructura básica para la protección de los derechos humanos y no puede ser reemplazado por la INDDHH

La institucionalización de un órgano independiente al Poder Judicial con facultades para recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, no implica ignorar la competencia natural del Poder Judicial. La INDDHH satisface necesidades que el Poder Judicial no puede. En tal sentido, la experiencia internacional comparada resalta que una INDDHH posibilita un mecanismo mediador, disuasivo y conciliador de comprobada eficacia por sus respuestas ágiles, informales, rápidas y sin costo. (Institución Nacional de Derechos Humanos. “Exposición de motivos”, pág. 21 y 22. IMPO. Ficha Informativa No. 1, Montevideo, 2012)”

En consecuencia, y conforme a lo dispuesto en el marco legal vigente, la INDDHH no realizará ningún comentario, observación, ni apreciación positiva o negativa sobre el mencionado auto de procesamiento, por estar absolutamente inhibida para hacerlo.

5. La apreciación de la prueba por los órganos jurisdiccionales y por los órganos de naturaleza cuasi-jurisdiccional de protección de los derechos humanos.

- a) No obstante lo anterior, no puede desconocerse que el legislador decidió que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo tuviera, en nuestro país, la naturaleza de un órgano de naturaleza cuasi jurisdiccional. Esto “(...) implica, de manera concreta, la posibilidad de recibir y examinar denuncias relativas a la situación de particulares, grupos, organizaciones, etcétera. Después de investigar la denuncia, las instituciones habrán de emitir sus recomendaciones dirigidas a la autoridad competente¹”.

¹ González Pérez, Luis Raúl: “El sistema no-jurisdiccional de protección de los derechos humanos en México”. Rev. IUS vol.5 no.28 Puebla jul./dic. 2011.

Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

- b) En esa dirección, el criterio de apreciación de la prueba de un órgano no jurisdiccional naturalmente difiere del aplicado por un órgano jurisdiccional, ya que los fines institucionales de ambos son sustancialmente diferentes.
- c) Este tipo de apreciación (las particularidades en la investigación y en la apreciación de la prueba en casos de violaciones a los derechos humanos) puede también trasladarse a los órganos no-jurisdiccionales que integran el Sistema de Protección (Universal o Regional) de los Derechos Humanos, e incluso a aquellos órganos internacionales de naturaleza jurisdiccional. Así, el maestro Héctor Fix-Zamudio expresa: “Otro principio básico para la apreciación de los medios de prueba de los procesos tramitados ante la Corte Interamericana se fundamenta en la apreciación de que no se trata de *causas de carácter penal*, ya que no se pretende determinar la culpabilidad de las personas, cuya conducta ha implicado la violación de los derechos humanos de las víctimas, sino exclusivamente la responsabilidad internacional del Estado demandado(...) Lo anterior no sólo afecta varios aspectos del procedimiento probatorio ante la propia Corte, como el relativo a la carga de la prueba, que en el proceso penal recae esencialmente en la parte acusadora (...) sino que también posee efectos importantes en la valoración de los elementos de convicción²”.
- d) Siguiendo el mismo razonamiento, el Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sergio García Ramírez expresa: “Convengo en que la Corte Interamericana, habida cuenta de su competencia material y de la misión que le incumbe para la protección de los derechos humanos, no debe sujetarse mecánicamente a los criterios de admisión y valoración de pruebas que prevalecen en el orden penal interno. En efecto, no tiene a su cargo una función penal, y puede y suele aceptar y analizar con mayor libertad los medios de convicción que se le allegan o que ordena motu proprio. Ahora bien, lo anterior no implica que se relativice o reduzca la exigencia probatoria que constituirá -con el correspondiente razonamiento lógico y jurídico- el fundamento de las afirmaciones sobre hechos violatorios de derechos fundamentales, responsabilidad internacional del Estado y consecuencias jurídicas derivadas de aquéllos y de ésta. La propia Corte -tribunal de Derecho- se refiere constantemente a las reglas de sana crítica que conducen sus apreciaciones en materia probatoria³”.

² Fix-Zamudio, Héctor: “Orden y valoración de las pruebas en la función contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Pág. 211 . UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Disponible en www.juridicas.unam.mx

³ Voto razonado con respecto a la Sentencia de la CorteIDH en el caso “Kawas Fernández vs. Honduras, del 3 de abril de 2009 del 3 de abril de 2009. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/votos/vsc_garcia_196_esp.doc.

- e) Finalmente sobre esta materia, es pertinente citar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto sostiene (al reflexionar sobre la valoración de la prueba en casos de violaciones a derechos humanos, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos) que: "La Corte Interamericana ha reconocido la potestad de un órgano internacional para evaluar libremente las pruebas, señalando que "[p]ara un tribunal internacional, los criterios de valoración de la prueba son menos formales que en los sistemas legales internos"(...) Por ello, elementos probatorios distintos de la prueba directa como la prueba circunstancial, los indicios, las presunciones, los recortes de prensa y, en su caso, los informes de organizaciones no gubernamentales pueden utilizarse siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes con los hechos o corroborar los testimonios o hechos alegados por los denunciantes (...) Asignar esta discrecionalidad a un órgano internacional adquiere particular relevancia "en los procesos sobre violaciones de derechos humanos, [en los cuales] la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado"(...) ⁴.

6. Las conclusiones preliminares de la INDDHH sobre el caso Tania Ramírez

- 6.1. La investigación judicial de la agresión sufrida sigue en curso. Restan varias instancias procesales, y a las personas procesadas (actualmente o, que lo sean eventualmente en el futuro) les ampara el principio esencial de presunción de inocencia hasta que recaiga sentencia definitiva en el juicio.
- 6.2. Como se señaló claramente en numerales anteriores, la INDDHH no puede ni debe realizar ningún tipo de comentario sobre el fondo del asunto, en la medida que la ley le ordena inhibirse de actuar una vez que un caso ha tomado estado judicial.
- 6.3. Sin perjuicio de lo anterior, y en base a la prestigiosa doctrina y jurisprudencia citadas ut supra, como órgano no- jurisdiccional la INDDHH puede apreciar los diversos hechos, testimonios y otras circunstancias sobre el caso, ya que la naturaleza de su intervención no es la de un órgano jurisdiccional, que debe apreciar la prueba producida de acuerdo a criterios legalmente definidos y con un objetivo preciso que, en el caso de un proceso penal, es determinar la culpabilidad o no de la persona sometida a juicio.
- 6.4. De acuerdo al Art. 32 de la ley 18.446, (Criterio para adoptar resoluciones), "Las resoluciones del Consejo Directivo de la INDDHH se adoptarán en base a

⁴ Corte IDH: "Abella y Otros vs. Argentina". Caso 11.137, Párr. 407. Informe 55/97, CIDH, OEA/Ser/L/V/II.97. (Nov. 18, 1997)

Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

elementos de convicción suficientes considerando la totalidad de los elementos probatorios del caso”.

- 6.5. En el caso a estudio, el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, estrictamente dentro de sus competencias, entiende que ha alcanzado los elementos de convicción suficientes para afirmar que hubo elementos racistas en la agresión sufrida

Por supuesto, y como ya se ha señalado reiteradamente, esta afirmación no alude a ningún tipo penal, ni mucho menos a la actuación del Poder Judicial y del Ministerio Público en el caso, ya que, una vez más, se trata de ámbitos de actuación diferentes dentro de la institucionalidad del Estado uruguayo.

- 6.6. Los elementos recogidos por la INDDHH (declaraciones de la víctima; de testigos del hecho y hasta de lo que surge del Auto de Procesamiento), permiten concluir que, al menos, las agresoras se dirigieron a la víctima como "negra de mierda" "hacéte una planchita" "negra hija de puta". En conclusión, es claro para la INDDHH la existencia de componentes racistas y discriminatorios en la agresión que motiva el caso a estudio.

- 6.7. Otro elemento que sigue en discusión en relación a este caso, fue la celeridad o no de la actuación de los órganos competentes del Estado para investigar y juzgar presuntos delitos. En este caso, el Art. 19 de la ley 18.446 impone a la INDDHH velar “(...) porque los órganos con función jurisdiccional, Contencioso Administrativo o la Administración, en su caso, resuelvan expresamente, en tiempo y forma, las demandas, denuncias, o recursos que hayan sido formulados o interpuestos”.

- 6.8. Al tratarse este pronunciamiento de una resolución preliminar, y por estar todavía en curso varias investigaciones sobre el caso, la INDDHH no presentará ninguna recomendación específica por el momento. Sin embargo, sí se permite acudir nuevamente a la doctrina y jurisprudencia internacional para comenzar a encuadrar el tema. En esa dirección, se señala que:

“En ocasiones, es irrelevante el tiempo transcurrido para la ponderación del daño; en otras, es muy lesivo para la víctima. Por ello, los otros elementos de apreciación de la razonabilidad -complejidad del asunto y conducta de autoridades y particulares- deben ponderarse igualmente a la luz del perjuicio que se está causando a la víctima. El tiempo no corre igual para todos, ni los elementos considerados tradicionalmente para fijar la razonabilidad del plazo afectan a todos igualmente (...)”⁵

- 6.9. Finalmente, la INDDHH no puede dejar de manifestar su enorme preocupación por la actitud de muchas personas presentes en el momento de la agresión, según puede observarse en el video grabado por las cámaras de seguridad del. Estas actitudes van desde la más absoluta pasividad; a la burla y, en ocasiones, hasta el incentivo para que la agresión violenta continuara. Se trata de un tema que

⁵ Idem nota al pie No. 3, párrafo 23

si bien no es extraño al tema abordado en este caso, debe ser objeto de otro estudio desarrollado con mayor profundidad por la INDDHH. En este momento, la INDDHH solamente pretende sumarse a otras voces que han reclamado una profunda reflexión sobre la calidad de la convivencia en la sociedad uruguaya de nuestros días.

7. En conclusión, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo resuelve:

- a) Continuar las actuaciones en relación al caso _____, conforme a lo dispuesto por los Arts. 11 y stes. de la ley No. 18.446 de 24 de diciembre de 2008.
- b) Continuar el seguimiento de los procedimientos pertinentes, conforme a lo ordenado por el Art. 19 de la mencionada norma legal.
- c) Establecer mecanismos de coordinación y protocolos de actuación eficaces con otras instituciones públicas competentes en el tema, así como con organizaciones de la sociedad civil, para contribuir a prevenir hechos como el que motiva estas actuaciones.
- d) Dar la mayor difusión pública a esta resolución preliminar.